

# GUILLERMO VELÁZQUEZ, *GEOGRAFÍA Y BIENESTAR*, Eudeba, Buenos Aires, 2008 (560 pp.)

---

Valentina Viego<sup>1</sup>

Universidad Nacional del Sur (Argentina)

El libro de Guillermo Velázquez está dedicado a la recopilación e interpretación de indicadores socioeconómicos de más de 500 localidades de Argentina con la meta de arribar a un ordenamiento municipal de calidad de vida. Por ello, esta publicación constituye un avance en muchos sentidos.

En primer lugar, su aportación fundamental es que se apoya en datos de nivel departamental, algo poco frecuente en países subdesarrollados, especialmente en Argentina, donde la escasez de datos y/o divergencias metodológicas impiden su comparabilidad. En segundo lugar, el libro aplica un esquema georreferenciado, útil para planificar políticas y dimensionar el alcance territorial de algunos fenómenos. En Argentina la utilización de sistemas de información geográfica es aún incipiente y, sin duda, el trabajo de Velázquez es una valiosa aportación en esa dirección. En tercer lugar, utiliza medidas superadoras del producto bruto o o del Índice de Desarrollo Humano (IDH), al incorporar otros aspectos de la calidad de vida, como educación, salud, vivienda y riesgos ambientales. Estas aportaciones contribuyen a que los resultados centrales del trabajo tuviesen una notable repercusión, incluso en medios masivos de comunicación.

Frente a ello, el libro de Velázquez comparte algunos defectos con otros estudios del campo de la geografía, a partir de la expansión de bases de datos georreferenciadas. En éstos la calidad de vida urbana es una temática que ha recibido creciente atención. En particular, en Argentina se han calculado indicadores para algunos aglomerados urbanos (Rosenfeld y otros, 2000; Leva, 2005; Mikkelsen, 2006; Buzai, 2003). Con todo, en conjunto, estos trabajos (entre los que se inscribe también la publicación aquí reseñada) tienen la debilidad de no identificar claramente la utilidad de un índice de calidad de vida (ICV). Un ordenamiento de regiones en función del ICV podría servir de guía en la asignación de fondos presupuestarios, crediticios, de ayuda, etc. y/o evaluar sus resultados. Pero, el problema es que el concepto mismo de calidad de vida tiene una multidimensionalidad tal que, a menudo, su definición es ambigua. Por ello, cualquier operacionalización resulta inadecuada. Así, clasificar regiones, otorgar fondos, así como para evaluar la eficacia de ciertos programas de ayuda en función de su impacto a partir

<sup>1</sup> Economista. Master en Economía Regional. Asistente de docencia. Investigadora del Instituto de Economía.

de un indicador por naturaleza defectuoso padece de inconvenientes. Más allá de este comentario general, es posible reflexionar sobre algunos de los aspectos específicos de la contribución de Velázquez.

El autor menciona que la pobreza se mide respecto a un "piso", relativamente fijo mientras que la calidad de vida se establece con respecto a un "techo", con mayor variabilidad debido a diferencias en las expectativas y escalas de valores. Sin embargo, la mayor parte de las variables que posteriormente adopta como indicadores de la calidad de vida (viviendas sin retrete, analfabetismo, carencia de cobertura social, etc.) no cumplen con tal pretensión<sup>2</sup>. Tomando como ejemplo la existencia de retrete dentro de la vivienda, es claro que su carencia afecta severamente las condiciones de vida, pero su posesión no asegura niveles sustancialmente superiores de calidad de vida. Una proporción elevada de hogares con cobertura de necesidades básicas no necesariamente implican una calidad de vida elevada, sino que pueden enmascarar una calidad de vida con menores disparidades pero apenas por encima del básico.

Si la calidad de vida se considera como un nivel aspiracional, el índice de calidad de vida, finalmente calculado, se aproximaría más a uno de carencia que a uno de calidad<sup>3</sup>. La falta de retrete, el analfabetismo, la carencia de cobertura médica constituyen condiciones necesarias pero no suficientes en la medición de la calidad de vida. Así, una discusión que se echa en falta en el texto es la problemática relativa a que en este tipo de mediciones las condiciones necesarias suelen restar potencia al índice, el foco debería desplazarse hacia las condiciones suficientes (Fayers y Hand, 2002).

El ICV calculado por Velázquez y su equipo amplía notablemente las dimensiones consideradas en el IDH, pero sigue omitiendo otras igualmente relevantes. Es cierto que parte de la omisión se debe a la carencia de información con cobertura departamental, sin embargo, en algunos casos, se dispone de variables con la desagregación espacial requerida, que no fueron consideradas sin que ello esté argumentado.

Por ejemplo, en el caso de la vivienda, aún con la limitación de sólo disponer de indicadores de carencia, más que de calidad de vida, podrían considerarse variables alternativas, como el acceso a servicios básicos (cloacas, agua potable, electricidad). Estos, además de operar como marcadores de calidad, tienen un impacto en el nivel de salud de la población. En este sentido, en el último capítulo el autor reconoce que el último censo poblacional relevó una serie de características del hábitat bastante rica en nivel de detalle (alumbrado público, gas natural, pavimentación de cuadras, recolección regular de residuos, transporte público, telefonía pública, etc.), que fortalecerían los

---

<sup>2</sup> El único esfuerzo registrado por escapar a ello se observa con hacinamiento, cuyo umbral baja de 3 a 2 a fin de efectuar la comparación con un nivel deseable más que con uno mínimo.

<sup>3</sup> Las medidas de pobreza más utilizadas (línea de pobreza, necesidades básicas insatisfechas) son asimismo poco satisfactorias por resultar anacrónicas; consideran modos básicos de satisfacción de las necesidades humanas, más que los deseables o la tendencia de la sociedad en la forma de atenderlas. Esto tiene un impacto desde el punto de vista político porque desestimula prácticas reivindicativas o de genuino progreso en las condiciones de vida de la población.

atributos públicos del ICV, en contraposición a los privados. Sin embargo, esta información tampoco fue utilizada en las estimaciones.

Uno de los problemas metodológicos centrales del trabajo es que utiliza datos censales como fuente primaria de información. Estos son útiles para la caracterización básica de un municipio, pero resultan insuficientes para un diagnóstico de las condiciones de vida de la población que lo habita. En este sentido, el estudio refleja la tentación, presente en algunos trabajos de investigación académica, de erigir análisis apoyados en datos aparentemente abundantes pero parciales e insuficientes. Por ello, sería aconsejable que el objetivo planteado fuera complementado con fuentes primarias alternativas de información. Por ejemplo, en el caso de educación, no se toman en cuenta otros indicadores no incluidos en el censo, pero que gozan de cobertura departamental, como son los ratios docentes/matrícula, los alumnos/aula o las tasas de repetidores.

Algo similar ocurre en el capítulo 9, donde se aborda la calidad de vida ofrecida por el medio físico y ambiental, pero se omiten aspectos referidos a contaminación ambiental. Si bien el texto aclara que la elección de los indicadores de peligrosidad fue guiada principalmente por la disponibilidad de información a nivel departamental, un índice de peligrosidad ambiental que no capte estas cuestiones resulta incompleto. Esta ausencia, entre otras (mecanismos de desecho de la basura, stock de espacios verdes en el ejido urbano, áreas recreativas por habitante, accesibilidad a otras localidades, etc.) hacen que el índice de calidad del medio físico obtenido sobreestime la calidad ambiental de regiones con condiciones climáticas favorables, con bajos riesgos de inundación, anegamiento o erosión de suelos, etc, pero con actividades altamente contaminantes y/o escasez de espacios de recreación y deporte.

Del mismo modo, el censo no capta tasas de morbilidad ni la incidencia de enfermedades laborales, indicadores que completarían aspectos cualitativos de la salud de una determinada población. Tampoco se tienen en cuenta el índice de desnutrición infantil, el ratio médicos/habitante, camas/habitante, porcentaje de niños vacunados, etc.

Como los objetivos de un censo poblacional son amplios, se entiende que no muestren una diversidad de aspectos. Pero esta justificación no es aplicable al ICV de Velázquez. No se pretende decir aquí que la falta de información debería cancelar todo esfuerzo de cuantificación estadística; cualquier intento en esa dirección es valioso, pero, realizada con datos insuficientes, otorga a la investigación un carácter preliminar y tentativo, más que concluyente. Desde este punto de vista, el título de la obra y sus páginas iniciales resultan temerarios frente a lo que después pueden o no confirmar los resultados expuestos.

Es posible argumentar a favor del trabajo de Velázquez que indicadores adicionales resultarían redundantes para mensurar la calidad de vida al estar correlacionados con los incluidos. Sin embargo, falta una prueba de la robustez del índice. Un trabajo de Bagolin (2004) para municipios de Brasil que sigue la misma metodología, incorpora más variables al IDH (proporción de niños nacidos con bajo peso, esperanza de vida, tasa de deserción escolar, etc.) para ilustrar que a) el IDH tiende a sobreestimar el índice de desarrollo y que b) la clasificación inicial alcanzada en función del IDH se modifica sustancialmente al incluir más variables. Esa presentación muestra que, al tiempo que

Brasil encabeza las clasificaciones mundiales de desigualdad, se ubica en lugares intermedios si se lo evalúa según el IDH. Ello refleja la falta de potencia del IDH; como los cálculos de Velázquez podrían tener esta desventaja por no exponer una comparación entre una clasificación obtenida a partir de su indicador y las clasificaciones obtenidas con otros métodos.

Redunda en esta crítica, constatar que cuando el propósito es la comparación del ICV entre países no resulta problemático, pues en Geografía y Bienestar, la elaboración del ICV se basa en la comparación del valor que cada variable toma a nivel departamental con los valores extremos. Por ello, este método de estandarización, en muestras grandes, ofrece cierta garantía de cubrir una diversidad de situaciones. Sin embargo, a nivel intra-país ello corre el peligro de sobreestimar la calidad de vida de regiones que se encuentran en los valores más altos del índice cuando prevalece una calidad de vida deteriorada generalizada. Por ello, la elaboración del índice, para ser provechosa, debería ser contrastada con un valor de referencia (benchmark) y no con los valores muestrales extremos o su valor promedio.

El estudio tampoco pasa la "prueba ácida". Cualquier intento de comprensión de la realidad -del cual el ICV es uno de ellos- es más o menos satisfactorio en términos de su habilidad para reflejar dicha realidad. Por ello, un paso confirmatorio necesario es el denominado "check to reality" (Sagar y Najam, 1998). El síntoma de que esta falla está presente se ve reflejado en los municipios que aparecen en el nivel más alto de la clasificación del ICV. Coronel Rosales sería el departamento con mayor calidad de vida, seguido de Monte Hermoso, ambos localizados en el SO bonaerense. El primero se caracteriza por su estancamiento poblacional y económico. Las razones de ello son estructurales y se deben al efecto negativo que para la economía de la zona tuvo el declive de los talleres navales allí ubicados. Como consecuencia, el estancamiento en los niveles de vida alcanzó tal magnitud que afectó los salarios; desde 2004 el personal civil de las fuerzas armadas y los trabajadores municipales han protagonizado luchas por la recomposición salarial con modesto éxito. Para ilustrar, en 2006 el salario básico de un empleado municipal representaba 60% del salario mínimo; actualmente apenas supera el 55%. Y, ello, después de haber conseguido algunos incrementos nominales. Paradójicamente en el municipio que se ubica en la cúspide del ICV, sus funcionarios no encuentran fondos suficientes para atender reclamos salariales en un contexto relativamente generalizado de alza de la recaudación y de los salarios. También llama la atención su lugar en el puesto cuando se ubica a escasos 20 km de un polo petroquímico, que ha protagonizado escapes potencialmente letales para la población circundante. Algo similar ocurre al comparar el valor del indicador con la realidad de la localidad de Monte Hermoso.

El trabajo de Velázquez, que si bien denota un esfuerzo mayúsculo en la recopilación y procesamiento de la información, padece del mismo problema que todos aquellos que intentan mensurar la calidad de vida: pretende una aproximación holística y exhaustiva de las condiciones de vida y termina adoptando un tratamiento reduccionista (Cox y otros, 1992). En su trabajo, como en los otros, ocurre que al pretender comparar grupos, regiones, etc. se procura resumir estas dimensiones en una medida global. Sin embargo, en presencia de profundas desigualdades internas, la construcción de un índice

compuesto no hace más que esconderlas, algo que el propio PNUD ya había reconocido para su IDH a nivel nacional. Si bien es cierto que los datos requeridos para incorporar aspectos distributivos van más allá de la disponibilidad actual, el reconocimiento de esta limitación resulta insoslayable.

Yendo más allá, hay autores que han cuestionado el cálculo de un índice (Cahill, 2005; Kamanou y otros, 2005). La agrupación de múltiples aspectos en un indicador implícitamente supone cierta sustituibilidad entre dimensiones, omitiendo que cada una de ellas constituye *per se* un factor esencial en la calidad de vida. La mejoría de una de estas dimensiones difícilmente puede compensar el déficit en otras. A pesar de este tipo de críticas, la forma funcional que toma el ICV calculado por Velázquez acepta la aditividad de los factores que influyen en la calidad de vida, cuando en realidad el patrón podría ser otro o incluso podría no ser formalizable. Las desventajas del método aditivo se profundizan al evaluar el impacto de las variaciones temporales que puedan experimentar alguno de los indicadores que forman parte del índice; por ejemplo, cualquier aumento del 10% en un indicador impactaría del mismo modo, independientemente del nivel inicial del indicador, cuando es más probable que, para apreciarse cambios significativos<sup>4</sup>, cuanto más cerca de los extremos esté su valor, mayores deberán ser las variaciones. Así, una aproximación aditiva es menos sensible para detectar el verdadero impacto en la calidad de vida que otras variantes.

Finalmente, la fuerte asociación que exhibe el ICV con el PBI regional introduce la duda del aporte específico de este indicador (medida que, de todos modos, agrega, más que matiza) por encima del PBI, algo que ya fue comentado por otros autores acerca del IDH (Larson y Wilford, 1979; McGrillivray, 1991; Cahill, 2005).

En suma, el trabajo de Velázquez requeriría un esfuerzo adicional, especialmente en los aspectos teóricos. La profundización en la utilidad de un índice de esas características, que trasciendan su capacidad descriptiva y de síntesis (de lo que ya se conoce), es algo que reclama no sólo este texto, en particular, sino el estado del arte en materia de estimaciones de índices de calidad de vida. Sería necesaria, además, una discusión más profunda de las nociones implícitas en su construcción para no padecer los inconvenientes que ya han sido señalados y que ya han sido superados, en parte, por otros trabajos. La propia noción de calidad de vida plantea limitaciones a la utilidad de un abordaje estadístico; hay dimensiones que los datos son incapaces de reflejar y, por ello, deberían ser abordadas con otro método. En esto, sigue vigente la opinión de Lutchers y Menkhoff (1996) de que a pesar del progreso en las herramientas y los paquetes de datos, sigue sin existir un método convincente para medir este concepto.

---

<sup>4</sup> Un esquema multiplicativo es capaz de incorporar esta propiedad (Desai, 1991), sin embargo, no elimina las compensaciones en el cálculo derivadas de mejoras en una dimensión simultáneas a empeoramiento de otras, es decir el supuesto de sustituibilidad.

## REFERENCIAS

- Bagolin I (2004); Human development index: a poor representation of human development approach; *Federal University of Rio Grande do Sul PhD Thesis*.
- Buzai G (2003); *Mapas sociales urbanos*; Buenos Aires: Lugar.
- Cahill M (2005); "Is the human development index redundant?"; *Eastern Ec J*; 31(1):
- Cox D, Fitzpatrick E, Fletcher A, Gore S, Spiegelhalter D y Jones D (1992); "Quality of life assessment: can we keep it simple?"; *J Royal Statistical Society Series A*, 155(3): 353-393.
- Desai M (1991); "Human development: concepts and measurement"; *Eur Econ Rev*. 35 (2:3): 350-357.
- Fayers P y Hand D (2002); "Causal variables, indicator variables and measurement scales: an example of quality of life"; *J Royal Statistical Society Series A*, 165(2): 233-261.
- Kamanou G, Ward M y Havinga I (2005); "Statistical issues in measuring poverty from non-survey sources"; en United Nations Statistics Division (ed); *Handbook on Poverty Statistics: Concepts, Methods and Policy Use*; Washington: 206-291.
- Larson D y Wilford W (1979); "The Physical Quality of Life Index: a useful indicator?"; *World Development*, 7(6): 581-584.
- Leva G (2005); *Indicadores de calidad de vida urbana. Teoría y metodología*; Quilmes: Politike.
- Luchters G y Menkhoff L (1996); "Human development as statistical artifact"; *World Development* 8(4): 1385-1392.
- McGillivray M (1991); "The Human Development Index: Yet Another Redundant Composite Development Indicator?"; *World Development*: 1461-68.
- Mikkelsen C (2006); "Ampliando el estudio de la calidad de vida hacia el espacio rural. El caso del partido de General Pueyrredón"; *Hologramática*; 6(4): 25-48.
- Rosenfeld E, San Juan G, Discoli C y Ferreyro C (2000); "Modelo de calidad de vida urbana para una gestión territorial sustentable"; *IV Congreso Arquisur UNLP*, Octubre.
- Sagar A y Najam A (1998); "The human development index: a critical review"; *Ecological Economics*; 23(3): 249-264.